Bogotá, 08 de octubre de 2024

Señores

**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

DESPACHO DEL GOBERNADOR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

E. S. D.

**REFERENCIA:** QUEJA Y SOLICITUD DE VIGILANCIA PREVENTIVA AL INTERIOR DE LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO N° 2024-007 Y 2024-009, QUE SE ADELANTA POR PARTE DE LA TESORERÍA DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO.

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, abogado en ejercicio, vecino de Cali, identificado con CC. No. 19.395.114 de Bogotá y portador de la T.P. No. 39.116 del C.S.J., actuando en calidad de apoderado general de la **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, con NIT 860.037.013-6, domiciliada en Bogotá, representación acreditada mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, me permito presentar QUEJA Y SOLICITUD DE VIGILANCIA PREVENTIVA AL INTERIOR DE LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO N° 2024-007 Y 2024-009, QUE SE ADELANTA POR PARTE DE LA TESORERÍA DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, contra mi representada, la Compañía Mundial de Seguros S.A. Esta solicitud se fundamenta en las irregularidades e inconsistencias presentadas en los mencionados procesos, las cuales han afectado gravemente los derechos fundamentales de mi representada.

1. **IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:**

**SOLICITANTE:**

* **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.,** sociedad legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., identificada con NIT 860.037.013-6, representada legalmente por la Dra. **MARISOL SILVA ARBELÁEZ**, mayor de edad, identificado con la CC No. 51.866.988.

**ENTIDAD SOBRE LA CUAL RECAE LA QUEJA Y SE SOLICTA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA:**

* **TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO,** representada por la señora tesorera **VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONÍ**, la profesional universitaria **DORIS AMPARO ORTIZ ORDOÑEZ** y la abogada especialista de la Secretaría de Hacienda **MARLIE YAMILE CABRERA BAUTISTA.** Pueden ser notificados a la dirección electrónica: [notificaciones.judiciales@putumayo.gov.co](mailto:notificaciones.judiciales@putumayo.gov.co) y [cobro.coactivo@putumayo.gov.co](mailto:cobro.coactivo@putumayo.gov.co)

1. **CUESTIÒN PRELIMINAR**

El presente escrito tiene como finalidad radicar Queja y solicitud de Vigilancia Preventiva sobre la actuación administrativa en los procesos de Cobro Coactivo No. 2024-007 y 2024-009, adelantados por la Tesorería General de la Gobernación del Putumayo en contra de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Todo esto con la finalidad de que se adopten medidas **PREVENTIVAS**, **URGENTES** y **DISCIPLINARIAS** que permitan suspender el agravio injustificado que se ha configurado en contra de mi representada, ante la inobservancia de sus derechos fundamentales.

1. **HECHOS Y ANTECEDENTES FÁCTICOS QUE SUSTENTAN LA QUEJA Y SOLICITUD DE VIGILANCIA SOBRE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.**

El relato de los hechos que suscitan y fundamentan la comisión de la vulneración de derechos fundamentales, y que ameritan el control y seguimiento de la actuación administrativa adelantada por la Tesorería de la Gobernación del Putumayo, se basa en lo siguiente:

**PRIMERO:** Mediante la Licitación Pública No. SPD-LP-010-2018, la GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO y el CONSORCIO VÍAS TERCIARIAS celebraron el Contrato de Obra No. 1225 de 2018, cuyo objeto fue el “*MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PARA UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO*” por un valor de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($24.417.417.608) y un plazo de quince (15) meses.

**SEGUNDO:** En virtud de la cláusula décimo octava del referido contrato, entre el CONSORCIO VÍAS TERCIARIAS y la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., se suscribió un contrato de seguro materializado en la Póliza de Seguro de Cumplimiento para Entidades Estatales No. NB-100100416, la cual cubrió los siguientes amparos: i) Incumplimiento, con un valor asegurado de $2.441.741.760; ii) Prestaciones Sociales, con un valor asegurado de $1.220.870.880; iii) Buen Manejo del Anticipo, con un valor asegurado de $7.325.282; y iv) Estabilidad de la Obra, con un valor asegurado de $2.441.741.760.

**TERCERO:** De conformidad con el acta de inicio del Contrato No. 1225 del 28 de diciembre de 2018, la ejecución del mismo comenzó el 12 de febrero de 2019, estableciéndose como fecha de terminación el 11 de mayo de 2020.

**FRENTE AL AMPARO DE MANEJO DE ANTICIPO**

**CUARTO:** Por oficio INTPUTUMAYO-2018-753 del 21 de febrero de 2023, la interventoría actualizó el informe de incumplimiento del 14 de noviembre de 2023 y solicitó el inicio de un proceso de incumplimiento en contra del contratista CONSORCIO VIA TERCIARIAS, a efectos de imponer una cláusula penal por valor de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($1.681.383.376).

**QUINTO:** Con base en dicho informe, se citó a la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la cual se llevó a cabo el 27 de febrero de 2023, suspendiéndose para el 3 de marzo de 2023. En esta última fecha, tanto el contratista como el apoderado del garante presentaron sus descargos, los cuales consistieron en que se presentaron situaciones ajenas al contratista que impidieron el cabal cumplimiento del contrato, como las que dieron lugar a la suspensión No. 02, las cuales nunca fueron superadas. Adicionalmente, frente a la póliza, se indicó que este carecía de cobertura temporal, que no se había realizado el riesgo asegurado y que se encontraban prescritas las acciones derivadas del contrato de seguro.

**SEXTO:** Por Resolución No. 021 del 21 de abril de 2023, se declaró que el contratista incumplió de manera grave sus obligaciones legales y contractuales en lo que respecta al manejo del anticipo y, en consecuencia, se declaró ocurrido el siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo por valor de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (**$5.247.963.388,45**). Dicho acto administrativo fue notificado en estrados el día 24 de abril de 2023.

**SÉPTIMO:** Contra dicha resolución, tanto el apoderado del contratista como mi prohijada interpusieron recurso de reposición, esta última con fundamento en los siguientes argumentos: a) caducidad de la facultad sancionatoria, b) desconocimiento del debido proceso y las formas propias de cada juicio, c) no se logró acreditar la ocurrencia del siniestro, ni los perjuicios ocasionados a la entidad pública, d) no se analizó el argumento de la falta de cobertura temporal de la Póliza No. NB-100100416 y, e) prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.

**OCTAVO:** Mediante Resolución No. 022 del 12 de mayo de 2023, se resolvieron los recursos de reposición interpuestos por el contratista y mi representada en contra de la Resolución No. 021 de 2023, confirmando en su integridad la decisión recurrida. Debe subrayarse que, según lo indicado en la parte resolutiva del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contratista y, por ende, la afectación del contrato de seguro, en su artículo segundo se estableció que la compañía de seguros debía hacer efectivo el pago del siniestro de conformidad con lo reglado en el artículo 1080 del Código de Comercio, es decir, un mes después de la ejecutoria del acto que confirmó la Resolución No. 021 de abril de 2023.

**FRENTE AL AMPARO DE CUMPLIMIENTO:**

**NOVENO:** Mediante la Resolución No. 038 del 10 de octubre de 2023, el Departamento del Putumayo declaró el siniestro y afectó el amparo de cumplimiento por valor de Doscientos sesenta y nueve millones seiscientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos con sesenta y tres centavos (**$269.692.249,63**). A mi representada, de acuerdo con el parágrafo del artículo tercero, se le ordenó cancelar dicho valor de acuerdo con el artículo 1080 del Código de Comercio.

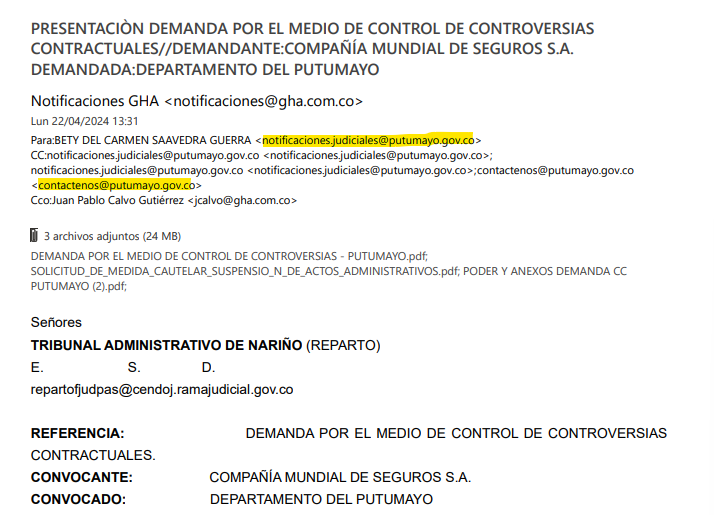
**DÉCIMO.** Tanto el apoderado contratista como el suscrito presentamos recurso de reposición en contra del acto administrativo sancionatorio.

**UNDÉCIMO.** Posteriormente, a través de la Resolución No. 051 del 19 de diciembre de 2023, se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 038 de 2023, confirmando la declaratoria del siniestro.

**FRENTE A LA DEMANDA PRESENTADA:**

**DÉCIMO SEGUNO.** El 22 de abril de los corrientes se radicó medio de control de controversias contractuales en contra del Departamento del Putumayo, con el cual se pretende la declaratoria de nulidad de los actos administrativos: Resolución 021, 022, 038 y 051 de 2023. Por otro lado, como restablecimiento del derecho se pidió reintegrar los dineros que se pagaran por concepto de estos procesos administrativos sancionatorios.

**DÉCIMO TERCERO.** Con la radicación de la demanda se dio traslado al Departamento del Putumayo, con el fin de cumplir con la carga procesal que trajo la Ley 2080 de 2021. Es así, como desde el 27 de abril de 2024 la gobernación conoce que existe un proceso en su contra con las pretensiones mencionadas:



**DÉCIMO CUARTO.** El proceso inicialmente fue conocido por el Tribunal Administrativo de Nariño bajo el radicado No. 52001233300020240011900**.**

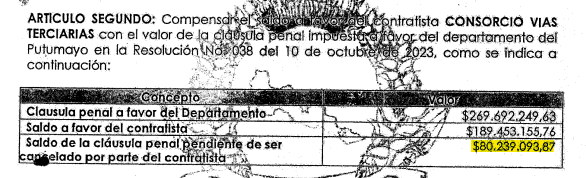
**DÉCIMO QUINTO.** Por el ACUERDO No. CSJNAA24-124 del 24 de mayo de 2024, el proceso fue remitido el 04 de junio al Tribunal Administrativo de Putumayo.

**DÉCIMO SEXTO.** El Tribunal Administrativo del Putumayo – Sala Unitaria, M.P. Manuel Alí Rodríguez Mustafá, avocó conocimiento del proceso mediante auto notificado por estados el 27 de junio de 2024.

**FRENTE A LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO:**

**DÉCIMO SÉPTIMO.** Mediante Resolución No. 189 del 19 de junio de 2024 el señor Edgar Orlando Gonzales Ortega, Secretario de Servicios Administrativos Departamental de Putumayo, decidió liquidar unilateralmente el Contrato de Obra No. 1225 del 28 de diciembre de 2018.

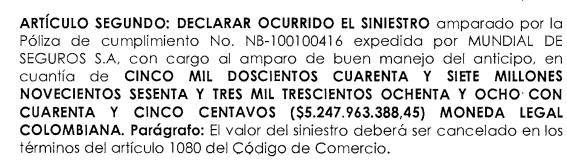
**DÉCIMO OCTAVO.** En el numeral segundo de la parte resolutiva de la mencionada resolución indicó la existencia de unos saldaos a favor del contratista por ciento ochenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y cinco pesos con setenta y seis centavos ($189.453.155,76), por lo que decidió aplicar la figura de la compensación teniendo en cuenta la afectación de la cláusula penal por valor de doscientos sesenta y nueve millones seiscientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos con sesenta y tres centavos ($269.692.249,63), es decir que el saldo de la cláusula penal después de la compensación es de ochenta millones doscientos treinta y nueve mil noventa y tres pesos con ochenta y siete centavos ($80.239.093,87):



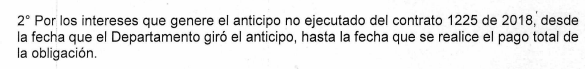
**FRENTE AL PROCESO DE COBRO COACTIVO 2024-007:**

**DÉCIMO NOVENO.** El día 04 de julio de los corrientes la Tesorería General del Departamento del Putumayo, Dra. Vanessa Tatiana Rivera Samboní, notificó a mi representada del Mandamiento de Pago No. 059 del 24 de junio de 2024 en el cual ordenó librar mandamiento por $5.247.963.388,45 por concepto del anticipo no ejecutado dentro del Contrato No. 1225. Adicionalmente, ordenó embargar las cuentas de la compañía aseguradora y del contratista por la suma de $16.509.304.622,8; nunca se indicó cómo llegó a este valor. Por último, ordenó computar intereses desde que el Departamento giró el anticipo, a pesar que esto nunca fue establecido en el acto administrativo sancionatorio:

* **Resolución No. 021 de 2023**:



* **Mandamiento de pago No. 059 de 2024**:



Nótese cómo la tesorería libro mandamiento de pago sin el sustento de un título ejecutivo. La Resolución No. 021 de 2023 que sirvió como título ejecutivo nunca contempló el cómputo de intereses desde que se giró el anticipo.

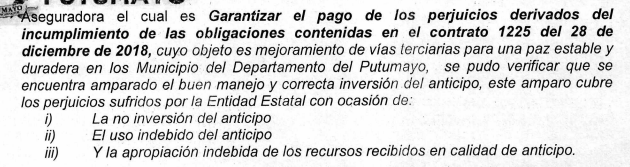
**VIGÉSIMO:** Debido a lo anterior, la compañía aseguradora solicitó la liquidación del crédito. El 05 de julio la administración remitió la liquidación por los siguientes valores:

1. **Capital:** $5.247.963.388,45
2. **Intereses corrientes:** $4.189.973.000,65
3. **Intereses moratorios:** $2.003.002.186,88

**Total:** $11.440.938.575,98

Como se puede apreciar, de forma irrisoria el despacho liquidó intereses corrientes, cuando resultaban improcedentes teniendo en cuenta que a la compañía aseguradora solo le corren intereses moratorios conforme al artículo 1080 del Código de Comercio.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Los días 05 y 08 de julio se solicitó a la administración re-liquidar el crédito considerando: 1) que los intereses corrientes no aplicaban y 2) que los intereses moratorios a aplicar son los civiles y no los comerciales, tal como lo ha establecido la Sección Tercera del Consejo de Estado, Consejero Ponente William Barrera Muñoz bajo radicado 25000-23-26-000-2006-00637-01. No obstante, dichas solicitudes no fueron resueltas favorablemente. De forma escueta la administración advirtió que la aseguradora sí debía asumir los intereses corrientes debido que se obligó a “*garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento*…”:



**VIGÉSIMO SEGUNDO.** Dada la decisión desfavorable y el embargo de las cuentas bancarias de la compañía, mi representada optó el 17 de julio por pagar de acuerdo con la liquidación jurídicamente correcta. Esto fueron $5.624.555.169,5 por capital actualizado y $756.344.668 por intereses moratorios; como es lógico, no se incluyeron los intereses corrientes. La Orden de Pago No. 1117663 fue de $6.380.899.838 en total. Con el pago realizado, se solicitó la terminación del proceso.

**VIGÉSIMO TERCERO.** El suscrito dentro de la oportunidad correspondiente presentó excepciones frente al mandamiento de pago. Las excepciones planteadas fueron:

* La interposición del medio de control de controversias contractuales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
* La falta de título ejecutivo
* La falta de competencia de la tesorería para el cobro de intereses corrientes
* La liquidación se realizó de forma errónea.
* La falta de título ejecutivo para cobrar una cifra que supera el valor asegurado
* El pago efectivo

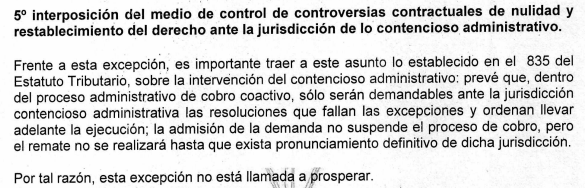
**VIGÉSIMO CUARTO.** El día 26 de julio la administración respondió a la solicitud de terminación del proceso de forma negativa pues concluyó que el pago realizado el 17 de julio se fue a capital, quedando un saldo de $703.224.301,69 por intereses moratorios y $4.189.973.000,65.

**VIGÉSIMO QUINTO.** Debido al tozudo criterio de la administración y el riesgo financiero por los embargos, mi representada tomó la decisión de adquirir una caución con Seguros del Estado S.A. mediante la Póliza No. 02-41-101000364 por valor de $4.893.973.000, es decir, por el total del presunto saldo adeudado. La caución fue aportada el día 31 de julio de los corrientes, por lo que se solicitó su aceptación y levantamiento inmediato de las medidas cautelares.

**VIGÉSIMO SEXTO.** La administración mediante oficio TGD-1398 aceptó la caución en aplicación del artículo 837-1 del Estatuto Tributario y ordenó levantar las medidas cautelares:



**VIGÉSIMO SÉPTIMO.** Mediante Resolución No. 075 del 08 de agosto de 2024 la Tesorería profirió acto administrativo que resolvió desfavorablemente las excepciones frente al mandamiento propuestas. Se sostuvo en que 1) el título ejecutivo le permitía cobrar intereses corrientes, 2) los intereses moratorios aplicables eran los comerciales, 3) el título es complejo y así se aportaron todos los documentos que lo componen, 4) las medidas cautelares se fijaron de acuerdo con la ley y frente a la interposición de la demanda de forma escueta, pues confundió la demanda contra los actos administrativos que sancionan contra el que resuelve excepciones de mérito contra el mandamiento de pago:



**VIGÉSIMO OCTAVO.** El pasado 09 de septiembre se presentó recurso contra la Resolución No. 075 de 2024 que resolvió las excepciones contra el mandamiento de pago. En ellas se reiteró la improcedencia del cobro de intereses corrientes, la improcedencia del cobro de interese moratorios comerciales y la necesidad de que el proceso coactivo se interrumpa por la existencia de una demanda en contra de las resoluciones que dieron lugar al cobro coactivo.

**FRENTE AL PROCESO DE COBRO COACTIVO 2024-007:**

**VIGÉSIMO NOVENO.** Sin requerimiento alguno y de forma voluntaria, la Compañía Mundial de Seguros procedió con el pago del siniestro de cumplimiento el pasado 31 de julio de los corrientes. El pago fue de **ochenta y siete millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos cuatro pesos con veinticuatro centavos** (**$87.994.504,24)**

Para la liquidación del monto adeudado, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos:

* **Fecha de firmeza del acto administrativo**: 22 de diciembre de 2023.
* **Aplicación del mes siguiente, conforme al artículo 1080 del Código de Comercio**: 22 de enero de 2024.
* **Sanción impuesta**: $269.692.249,63.
* **Saldo a favor del contratista**: $189.453.155,76.
* **Saldo después de compensación:** $80.239.093,87.
* **IPC inicial** (enero 2024): 138,98.
* **IPC final** (junio 2024): 143,38.
* **Capital indexado**: $82.779.401,92.
* **Interés mensual civil aplicable:** 1%.

**TRIGÉSIMO:** El 28 de agosto de 2024, la Gobernación del Putumayo, en el marco del proceso sancionatorio contractual citado en el hecho cuarto, informó que el total de la obligación ascendía a $298.140.323,49, monto que incluye la cláusula penal por incumplimiento de $269.692.249,63, más intereses calculados conforme al artículo 1080 del Código de Comercio por la suma de $28.448.073,86, generados hasta la fecha de consignación.

**TRIGÉSIMO PRIMERO:** Indicó la Gobernación del Putumayo que la Compañía Mundial de Seguros realizó un abono en el proceso, el cual fue aplicado de la siguiente manera: **$59.546.430,14** abonados a capital y **$28.448.073,86** abonados a intereses. Según la Gobernación del Putumayo, quedó pendiente un saldo de capital de **$210.145.819,49**, más los intereses generados desde el 2 de agosto hasta la fecha en que se realice el pago total de la obligación. Respecto a efectuar la correspondiente compensación a favor del contratista, el ente territorial señaló que dicha compensación no es viable, ya que el único autorizado para disponer de esos fondos es el contratista, y no la aseguradora.

**TRIGÉSIMO SEGUNDO:** La Gobernación del Putumayo incurrió en un error al omitir la aplicación de la figura de compensación, a pesar de que existían saldos a favor del contratista. Aun con la disponibilidad de estos fondos, la administración procedió a imputar intereses comerciales sobre el saldo adeudado, sin considerar la figura del derecho civil de la compensación de saldos, la cual permite extinguir obligaciones recíprocas entre dos partes. De haberse aplicado dicha compensación, se habría omitido incurrir en la arbitrariedad y discrecionalidad en la imputación de intereses, no adeudados por mi representada.

**TRIGÉSIMO TERCERO:** El 23 de agosto de 2024, la Gobernación del Putumayo profirió la Resolución No. 083, mediante la cual se libró mandamiento de pago y se ordena una medida preventiva en el interior del proceso de Cobro Coactivo No. 2024-009 en contra de mi representada, por la suma de **$210.145.819,49 M/cte (DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS).** En dicha orden de pago, tampoco se hace alusión a la compensación de saldos a favor del Consorcio Vías Terciarias. La medida cautelar se fijó por cuatrocientos veinte millones doscientos noventa y un mil seiscientos treinta y ocho pesos con noventa y ocho centavos (**$420.291.638,98**)

**TRIGÉSIMO CUARTO:**  El pasado 20 de septiembre de 2024 el suscrito presentó las siguientes excepciones frente al Resolución No. 083 del 23 de agosto de 2024:

1. Falta de título ejecutivo para cobrar intereses moratorios comerciales
2. Falta de título ejecutivo porque la obligación no es clara, expresa ni exigible
3. Excepción de pago efectivo
4. Interposición del medio de control de controversias contractuales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
5. El mandamiento de pago no integra la totalidad de los documentos que conforman el título ejecutivo complejo
6. Las medidas cautelares superan el tope de embargabilidad
7. Inexistencia de la calidad de deudor solidario

**TRIGÉSIMO QUINTO.** Teniendo en cuenta que la administración no aceptó el pago efectivo y dispuso radicar los oficios de embargo ante las entidades bancarias, el 09 de septiembre mi representada decidió contratar caución con Seguros del Estado S.A. bajo la Póliza No. 02-41-101000373 por valor de cuatrocientos veinte millones doscientos noventa y un mil seiscientos treinta y ocho pesos con noventa y ocho centavos ($420.291.638,98). En ese sentido, se solicitó a la Tesorería aceptar la caución y levantar las medidas cautelares.

**TRIGÉSIMO SEXTO.** El 25 de septiembre la Tesorería se negó a aceptar la caución y, en consecuencia, a levantar el embargo. De manera sorpresiva y sin criterio jurídico, determinó que la caución no procedía por expresa prohibición del artículo 599 del Código General del Proceso (CGP) al ser la ejecutante una entidad pública. Carece de soporte jurídico esta actuación en tanto el proceso de cobro coactivo del Departamento de Putumayo se rige por la Ordenanza No. 766 de 2018 y/o por el Estatuto Tributario Nacional, los cuales permiten que se fije caución en el proceso de cobro coactivo.

De igual forma, es flagrante la violación a derechos fundamentales por parte de la Tesorería del Departamento del Putumayo, pues en el Cobro Coactivo No. 2024-007 sí aceptó la caución y en el 2024-009 no.

1. **IRREGULARIDADES COMETIDAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA TESORERÍA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

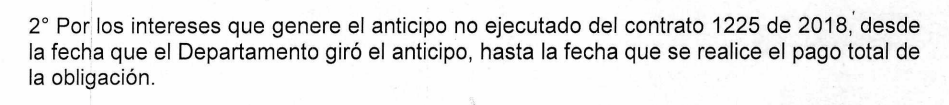
De acuerdo con los hechos narrados y las pruebas aportadas, es posible advertir que las funcionarias **Vanessa Tatiana Rivera Samboní**, Tesorera General del Departamento del Putumayo, **Doris Amparo Ortiz Ordoñez**, profesional universitario de Tesorería y **Marlie Yamile Cabrera Bautista**, abogada especialista de la Secretaría de Hacienda, incurrieron en sendas irregularidades administrativas y disciplinarias por lo siguiente:

1. **DECIDIERON EJECUTAR UN MANDAMIENTO DE PAGO SIN UN TÍTULO EJECUTIVO QUE LES PERMITIERA COBRAR INTERESES CORRIENTES.**

En relación con el mandamiento de pago emitido por el Departamento del Putumayo y la medida preventiva ordenada mediante la Resolución No. 059, es evidente que se ha incluido una obligación que no forma parte del título ejecutivo complejo. Asimismo, el Auto No. 107, que dispone el mandamiento de pago a favor del Departamento del Putumayo y en contra de mi representada, presenta serias irregularidades en su expedición, afectando directamente la ejecutabilidad del título. Para abordar este asunto, es pertinente desglosar y referirse al artículo 422 del Código General del Proceso

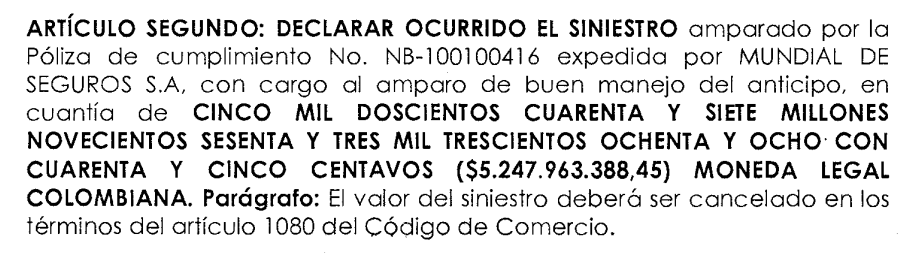
**ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO.** Pueden demandarse ejecutivamente las **obligaciones expresas, claras y exigibles** que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184*.” (Énfasis es propio).*

La circunstancia por la cual el acto administrativo en particular adolece de la ejecutabilidad de la que se vale el ente territorial, y que impide exigir el pago de la suma allí contenida, yace en la ausencia de los requisitos del título. Específicamente, el contenido del título no contempla una obligación actualmente expresa, clara y exigible que surta efectos obligacionales frente a la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Esto se debe a que la administración pretende el cobro de intereses corrientes desde la fecha en que el Departamento giró el anticipo al contratista afianzado hasta la fecha en que se realice el pago total de la obligación, así:

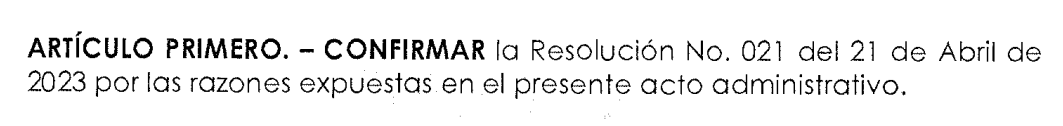


Sobre ese particular no puede perderse de vista que nos encontramos ante un título ejecutivo complejo por cuanto lo conforman el acto administrativo inicial Resolución No. 021 del 21 de abril de 2023 junto con los actos administrativos que resuelven los recursos, esto es Resolución No. 022 del 12 de mayo de 2023.

Adviértase que la Resolución No. 021 del 21 de abril de 2023, mediante la cual se declaró el siniestro con cargo al amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, no incluyó en su parte resolutiva la obligación de pagar los intereses generados por el anticipo no ejecutado del Contrato 1225 de 2018. Estos intereses, que abarcan desde la fecha en que el departamento giró el anticipo hasta la fecha en que se realice el pago total de la obligación, no se establecieron como una obligación susceptible de ejecución. Únicamente se dejó claro que la obligación de la compañía de seguros debía ser cancelada en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio, como se expone a continuación:



Por su parte, la Resolución No. 022 del 12 de mayo de 2023, mediante la cual se resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución No. 021 del 21 de abril de 2023, confirmó en su integridad dicha resolución, sin que se haya adicionado o modificado apartado alguno que permitiera a la Tesorera General del Departamento del Putumayo incorporar una obligación que no se insertó en el título ejecutivo complejo, como lo es el pago de intereses corrientes a partir del giro del anticipo no ejecutado desde la fecha en que el departamento giró el anticipo. Pretender la exigibilidad de tal obligación resulta improcedente e inconsulta, ya que se intenta declarar y ejecutar una obligación que no forma parte del título ejecutivo complejo *per se*, como puede constatarse claramente por el Departamento del Putumayo:

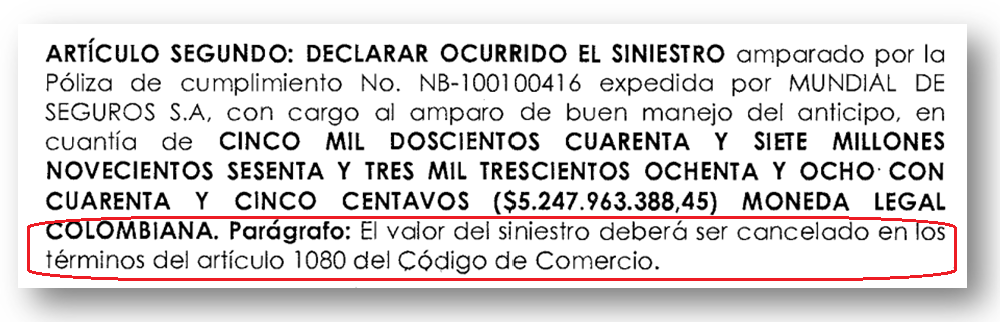


En vista de lo anterior, no es procedente que el Departamento del Putumayo liquide el crédito incorporando una nueva obligación que no hace parte del título ejecutivo, lo cual riñe con los presupuestos necesarios para que puedan demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles. Por ello, el mandamiento de pago reviste falta de título, ya que se pretende ejecutar unos intereses corrientes computados desde la fecha de entrega del anticipo al contratista, desconociendo que la obligación en cabeza de la compañía de seguros pende del acto administrativo por medio del cual se declaró el siniestro, esto es, con la Resolución No. 021 del 21 de abril de 2023 y la Resolución No. 022 del 12 de mayo de 2023. En ningún momento la compañía aseguradora asume la totalidad de las obligaciones del contratista, sino las que expresa y previamente se hayan pactado en el contrato de seguros de acuerdo con la ley; no es posible atribuirle a la aseguradora el deber de reintegrar el anticipo junto con sus intereses corrientes, pues esta nunca recibió el dinero ni debía amortizarlo dado que no pueden abrogarse obligaciones que no le corresponden.

Nótese que el 16 de mayo de 2023 fue la fecha en la que quedó ejecutoriada la resolución por medio del cual se resolvieron los recursos de ley, siendo que a partir de esta cuando debió computarse inicialmente el término establecido en el artículo 1080 del Código de Comercio, el cual establece que el asegurador está obligado a realizar el pago del siniestro dentro del mes siguiente de declarado el mismo sobre el hecho constitutivo del riesgo asegurado, así:

**El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad**. (negrilla adrede)

Lo anterior quedó consignado a su vez en la Resolución No. 021 del 21 de abril de 2023:



Nótese, entonces, que la resolución que desató el recurso de reposición incoado, en ningún apartado, hizo referencia a que mi representada debía asumir el pago de intereses desde la fecha que el Departamento giró el anticipo, hasta la fecha que se realice el pago total de la obligación. Por ende, constituye una razón más para concluir que no existe una obligación clara, expresa y exigible, que provenga de mi representada y que esté debidamente identificada en las mentadas resoluciones. Por tal motivo, no puede hablarse de la existencia de un título ejecutivo por la potísima razón de que los actos (que no contiene en la obligación tal y como lo indica la ley para que pueda ser ejecutada) no hacen referencia a la suma líquida de dinero que hoy se ejecuta y, mucho menos, hace mención a que mi representada debe asumir el pago de intereses.

El Consejo de Estado de manera reiterada, con base en lo previsto en el artículo 422 del CGP, ha señalado que los títulos ejecutivos, al margen de si son simples o complejos, deben gozar de unas condiciones formales y otras sustanciales: Las primeras se refieren a que los documentos en los que consta la obligación deben ser auténticos y emanar del deudor o de su causante, de una decisión condenatoria proferida por un juez o un tribunal u otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva y, las segundas, se traducen en que las obligaciones a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante deben ser claras, expresas y exigibles.

Pues bien, adviértase, entonces, que en ningún apartado de las resoluciones proferidas en la actuación administrativa sancionatoria (una de ellas que sirvió de soporte para librar mandamiento de pago) no hace referencia: **a)** que mi procurada debe asumir el pago de intereses desde la fecha que el departamento giró el anticipo, hasta la fecha que se realice el pago total de la obligación **b**) que mi representada adeuda la suma de $2.003.002.186 por concepto de intereses moratorios **c**) la forma cómo ha de calcularse la mora en caso de no pagarse la suma de dinero indicada en las mentadas resoluciones. Por ende, resulta claro que los documentos presentados como sustento de recaudo no contienen una obligación clara, expresa y exigible, razón por la cual se insiste no hay título ejecutivo.

Emerge así palmario que la Gobernación del Departamento del Putumayo erró al incorporar al mandamiento de pago obligación que no consta en el documento que proviene del título ejecutivo complejo, por lo que no puede constituirse como plena prueba contra el asegurador y, por consiguiente, dicha obligación no es expresa, clara ni mucho menos exigible. En razón de que el título ejecutivo complejo determinó que los intereses se causarían de conformidad con el artículo 1080 del Estatuto Comercial colombiano y no de la arbitraria manera en que se pretende por parte de la administración pública, en directo desmedro del patrimonio de la Compañía Mundial de Seguros S.A. De mantenerse tal situación, la administración incurriría en un enriquecimiento sin justa causa, y por descontado en una responsabilidad del Estado.

En palabras del Consejo de Estado, para que las obligaciones puedan ser susceptibles de ejecución requieren cumplir requisitos de forma y fondo, respecto del fondo el máximo tribunal refiere que:

**Una obligación es (i) expresa cuando está determinada en el mismo título, de forma nítida, sin que sea necesario acudir a lucubraciones, suposiciones o razonamientos lógicos jurídicos para determinarla.** En este punto, no se puede soslayar que el título ejecutivo puede emanar de una confesión ficta o tácita, en razón de lo normado en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil; (ii) **es clara cuando está determinada de forma fácil e inteligible en el documento o documentos y en sólo un sentido y (iii) exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condición.** Dicho de otro modo, la exigibilidad de la obligación se manifiesta en la que debía cumplirse dentro de cierto término ya vencido o cuando ocurriera una condición ya acontecida o para la cual no se señaló término, pero cuyo cumplimiento sólo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió, y la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condición, previo requerimiento.[[1]](#footnote-1) (negrilla adrede)

Además de la innegable importancia de los requisitos que componen el título ejecutivo, el Honorable Consejo de Estado examinó la efectividad del título en los siguientes términos:

El inicio de un proceso administrativo de **cobro implica la preexistencia de un título que preste mérito ejecutivo, esto es, que contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible**, por no estar pendiente de ningún plazo o condición. El artículo 828 del Estatuto Tributario, señala los documentos que prestan mérito ejecutivo para el cobro coactivo, que sirven de soporte jurídico para que la administración proceda a iniciar el proceso mediante la expedición del correspondiente mandamiento de pago.[[2]](#footnote-2) (negrilla adrede)

Desde el punto de vista de la a Sección Tercera de esta Corporación, en providencia del 6 de junio de 2007, reiterada en fallo del 26 de mayo de 2016, señaló:

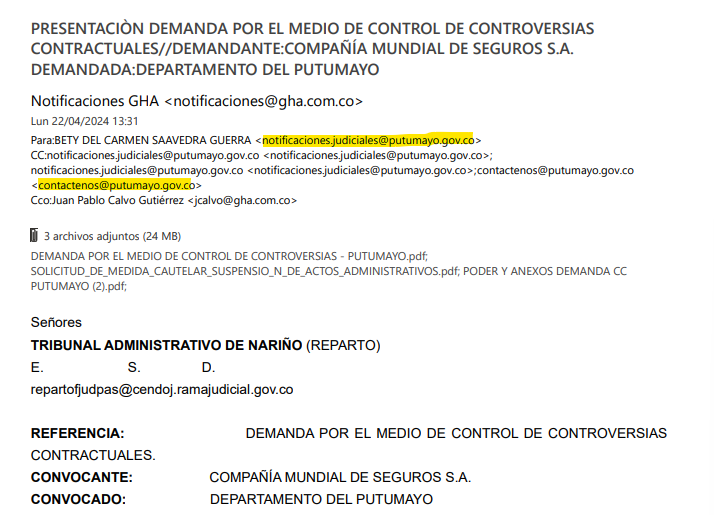
específicamente respecto del cobro ejecutivo de las pólizas de seguro tomadas por los contratistas de la Administración para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal, es decir, en aquellos eventos en los que la Administración reclama judicialmente el pago de la indemnización contenida en esa póliza de seguro, **se observa que ésta, constituye apenas, uno de los componentes del título ejecutivo complejo que en estos eventos de cobro ejecutivo de obligaciones contractuales a favor de la Administración, se debe conformar, y que comprende, no sólo la respectiva póliza -en la que consta el traslado del riesgo que el contratista de la Administración le hizo a la aseguradora, respecto de su deber de indemnizar a la entidad estatal por los perjuicios surgidos de su incumplimiento contractual-, sino también, el contrato estatal y el acto administrativo mediante el cual se declaró la existencia del siniestro**

**La obligación es expresa porque se encuentra especificada en el título ejecutivo, en cuanto debe imponer una conducta de dar, hacer o no hacer. Es clara cuando sus elementos están determinados o pueden inferirse de una simple revisión del título ejecutivo y es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de esta porno estar pendiente de un plazo condición[[3]](#footnote-3)** (negrilla adrede)

Por las razones anteriores, la obligación de computar intereses desde que se giraron los recursos al contratista no es expresa, puesto que no se consignó en el título ejecutivo. Tampoco es clara, ya que en el título ejecutivo complejo se determinó que los intereses para el asegurador se computarían de conformidad con el artículo 1080 del Código de Comercio y no de la manera indebida como pretende el Departamento del Putumayo. Por lo tanto, el mandamiento de pago no es exigible a mi parte, ya que se incorporaron obligaciones que no forman parte del título ejecutivo y las sumas calculadas con intereses no cuentan con respaldo normativo que así lo determine.

1. **INICIARON AMBOS PROCESOS COACTIVOS A PESAR DE QUE EXISTE UNA DEMANDA QUE SE PRESENTÓ ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS MANDAMIENTOS DE PAGO Y QUE EN ELLA SE CUESTIONA LA VALIDEZ DE LAS RESOLUCIONES QUE DIERON LUGAR AL PROCESO DE COBRO.**

Desde abril de los corrientes mi representada radicó medio de control de controversias contractuales con el fin de solicitar la nulidad de los actos administrativos Nos. 021, 022, 038 y 051 de 2023, y como restablecimiento del derecho los valores que se pagaron o se llegaren a pagar. Desde que se radicó la demanda se le dio traslado al Departamento del Putumayo, por lo que desde ese momento tuvieron conocimiento de la censura contra dichas resoluciones, tal como se puede evidenciar a continuación:



Cabe anotar que el Tribunal Administrativo de Putumayo avocó conocimiento mediante auto notificado por estados el 27 de junio de 2024, es decir, varios días antes que la Tesorería notificara el primer mandamiento de pago.

Tanto el Estatuto de Rentas del Putumayo, Ordenanza 766 de 2018 como el Estatuto Tributario Nacional contemplan la interposición de la demanda como una de las excepciones contra el mandamiento veamos:

***ARTÍCULO 594. EXCEPCIONES. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones.***

(…)

5.La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

(…)

*ARTÍCULO 831. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:*

*(…)*

***5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.***

(…)

Tanto el estatuto de rentas de orden departamental como el nacional indican que, al encontrarse probada una excepción, la consecuencia es declararla probada y terminar el proceso coactivo: “*Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario competente así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento cuando fuere del caso y el levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren decretado.*”

Es así, como la Tesorería en un primer momento debió abstenerse de iniciar los procesos coactivos. Luego, si se daba cuenta de la existencia con las excepciones al mandamiento, debió terminar los procesos coactivos pues aún los títulos ejecutivos en los que se fundamentan estos cobros no tienen ejecutividad, dado que están siendo analizados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo quien será la encargada de tomar una decisión definitiva frente a la legalidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento.

1. **INCURRIERON EN UNA VÍA DE HECHO AL COBRAR UNOS INTERESES COMERCIALES IMPROCEDENTES.**

La liquidación del crédito emitida por el ente territorial resulta exorbitante por dos razones fundamentales. En primer lugar, no se tuvo en cuenta que los intereses que se deben imputar a mi representado deben comenzar a computarse a partir del mes siguiente a la ejecutoria de la resolución que declaró el incumplimiento del contratista afianzado, de conformidad con el artículo 1080 del Código de Comercio. En segundo lugar, la administración desconoce que a la aseguradora no le son aplicables los intereses del artículo 1080 del Código de Comercio, ya que su obligación se contrae a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del garantizado.

En ese sentido, deberá el Departamento ejecutor dar aplicación a la regla contenida en el del artículo 4, ordinal 8 de la Ley 80 de 1993,

8o. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios.

**Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado.***(negrilla adrede)*

La liquidación del valor de la sanción contractual que está cobrando coactivamente el Departamento, legalmente tiene que sujetarse a lo regulado en la Ley 80 de 1993, así como a lo establecido en los precedentes judiciales obligatorios, reiterados en la sentencia del Consejo de Estado, del 24 de abril de 2024 Consejero Ponente Dr. William Barrera Muñoz, radicado 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472), la cual es vinculante y obligatoria en la cual, respecto de la liquidación de los intereses moratorios en tratándose de sanciones u obligaciones contractuales, se reiteró que a los aseguradores el cálculo respectivo debe realizarse con base en lo consagrado en la Ley 80 de 1993, como se acredita con la siguiente transcripción de dicho fallo, del cual se adjunta copia íntegra:

(…) En primer lugar, debe resaltarse que, en sede del contrato de seguro, según lo dispuesto por el artículo 1080 del Código de Comercio, el incumplimiento de la obligación de indemnizar u objetar dentro del mes siguiente a que se presente la reclamación implica la causación de intereses moratorios equivalentes al bancario corriente aumentado en la mitad.

**No obstante, este es un contrato de seguro en el que una de las partes, según lo definimos anteriormente, es una entidad pública de las referidas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, motivo por el cual es un contrato que adquiere la connotación de estatal, regido por el Estatuto General de la Contratación Pública**. Ahora bien, en los términos del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales se rigen por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo por lo particularmente regulado en ese compendio normativo. Y, **en lo que atañe el cálculo de intereses moratorios, la Ley 80 de 1993 trae una norma especial que determina que, a falta de pacto entre las partes en contrario, la tasa de intereses aplicable es la del doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado. (…). *(la negrilla es ajena al original)***

En el caso está claro que se dan los presupuestos normativos por los cuales debe aplicarse la Ley 80 de 1993, como lo ha reiterado en línea jurisprudencial vinculante el Consejo de Estado, según las siguientes precisiones:

1. El Departamento del Putumayo celebró el Contrato de Obra Pública No. 1225 de 2018 con el Consorcio Vías Terciarias, el cual fue garantizado por la Póliza No. NB-100100416 expedida por mi representada.
2. El Departamento del Putumayo es una entidad estatal, según el artículo 2 de la Ley 80 de 1993.
3. Ni en el Contrato Estatal de Obra Pública No. 1225 de 2018, ni en el de seguro citado, existe estipulación alguna de intereses moratorios comerciales y por lo tanto le son aplicables los del citado artículo 4.
4. Como el Departamento del Putumayo figura como asegurado y beneficiario en el contrato de seguro, Póliza No. NB-100100416, este último también es un contrato estatal, como lo ha señalado el Consejo de Estado al establecer la naturaleza jurídica de las pólizas de cumplimiento que garantizan contratos estatales, y en tal virtud está regido por las normas especiales de la Ley 80 de 1993 y, en lo no previsto en esta, por el Código de Comercio.
5. Habiéndose declarado el siniestro afectando la Póliza NB-100100416, a la compañía Mundial de Seguros únicamente se le podrían cobrar los intereses moratorios con base en el citado artículo 4 ordinal 8 de la Ley 80 de 1993.

Bajo la anterior tesitura, y contrario a lo liquidado por el Departamento del Putumayo, no es procedente aplicar una única tasa de interés moratorio comercial. Lo correcto era imputar intereses al asegurador una vez finalizado el plazo del artículo 1080 del Código de Comercio, y no desde el giro de los recursos al contratista afianzado ni desde el día que se notifica la resolución que deja en firma el proceso sancionatorio contractual. Tampoco es admisible que el Departamento haya computado los intereses como si cada mes contable tuviera 31 días, cuando el proceder adecuado es computar con 30 días calendario, error que distorsiona y difiere en grado superlativo el cálculo real de los intereses debidos.

1. **INCURRIERON EN UNA VÍA DE HECHO AL ACEPTAR UNA CAUCIÓN JUDICIAL EN EL PROCEO COACTIVO 2024-007 Y NO EN EL COACTIVO 2024-009 A PESAR QUE SON ANÁLOGOS.**

La Tesorería del Departamento del Putumayo decidió tomar decisiones contrarias ante escenarios similares. Claramente la administración erró en admitir la caución en el proceso 2024-007 y no en el 2024-009 lo cual denota una violación flagrante al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Los mencionados procesos coactivos son similares en la medida que pretenden el cobro de unas obligaciones que provienen de un proceso sancionatorio contractual. Dicho cobro se rige por el Estatuto Tributario Nacional y por la Ordenanza 766 de 2018 o Estatuto de Rentas Departamental. Ahora bien, ambas disposiciones permiten que el ejecutado tome caución siempre que la misma asegure la obligación pendiente.

Tanto el artículo 503 de la Ordenanza como el 837-1 de la Estatuto de Renta Nacional disponen: “*Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o* ***el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañías de seguros****. En ambos casos, la entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o a petición de parte, a ordenar el desembargo*”. (negrita adrede)

Ahora, la administración flagrantemente incurre en una vía de hecho al negar la caución en el proceso de cobro coactivo 2024-009 y manifestar que es prohibido según el artículo 599 del CGP: “La caución a que se refiere el artículo anterior, no procede cuando el ejecutante sea una entidad financiera o vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o **una entidad de derecho público**” (negrita fuera del texto original).

Si bien existe tal disposición, esta no es aplicable al caso dado que los procesos de cobro coactivo del Departamento de Putumayo no se rigen por el Código General del Proceso como si fuera un proceso ejecutivo, sino bajo las normas del estatuto de rentas, tanto nacional como departamental. Por otro lado, no se entiende porqué en un proceso coactivo si acepta la caución y en otro no, a pesar que:

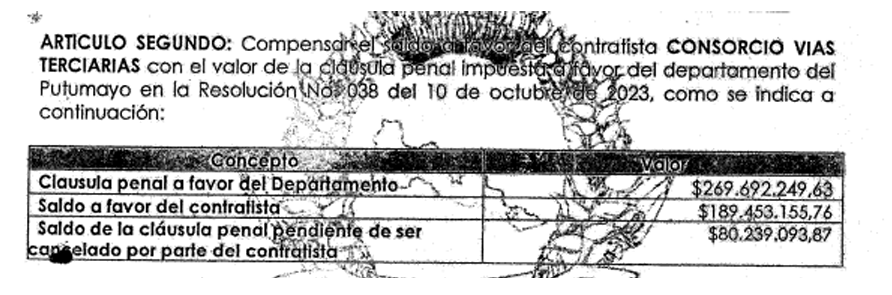
* Ambos títulos ejecutivos provienen de un proceso sancionatorio contractual
* Ambos títulos ejecutivos se relacionan con las mismas partes, pero diferentes siniestros
* Ambos procesos coactivos son conocidos por los mismos funcionarios
* Los procesos coactivos se llevan aproximadamente dos (2) meses de diferencia.

En consecuencia, es clara la vía de hecho y la flagrante conducta de los funcionarios de la Tesorería del Departamento del Putumayo, la cual está perjudicando gravemente los intereses de mi procurada.

1. **INCURRIERON EN UNA VÍA DE HECHO AL OMITIR APLICAR LA COMPENSACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO 2024-009.**

La Tesorería del Departamento del Putumayo erró en omitir aplicar la figura de la compensación. Cuando se emitió la Resolución No. 189 del 19 de junio de 2024 por medio de la cual se liquidó unilateralmente el Contrato de Obra No. 1225 del 28 de diciembre de 2018, la Secretaría de Servicios Administrativos Departamentales determinó que existe un saldo a favor del contratista por valor de $189.453.155,76. Al existir dichos saldos a favor, lo correcto era que se aplicara la figura mencionada antes de proceder al cobro de toda la obligación junto con unos intereses improcedentes.

En la parte resolutiva de la Resolución No. 189 de 2024, artículo segundo, se indicó que esos saldos a favor se le restarían al valor de la sanción por clausula penal, tal como se puede apreciar a continuación:



***Transcripción:******ARTICULO SEGUNDO:*** *Compensar el saldo a favor del contratista* ***CONSORCIO VÍAS TERCIARIAS*** *con el valor de la cláusula penal impuesta a favor del departamento del Putumayo en la Resolución No. 038 del 10 de octubre de 2023, como se indica a continuación:*

Que los actos administrativos, y en particular la Resolución No. 189 de 2024, establecieron, además de la aplicación del mecanismo de compensación de deudas, una obligación sujeta a una **condición suspensiva**, la cual debía cumplirse para poder acreditar el derecho ante mi representada. En este sentido, el Código Civil establece lo siguiente respecto a la compensación*: "Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, en la forma y los casos que a continuación se explican"*. De manera similar, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 16 de septiembre de 2005, ha señalado:

Requisitos legales de la compensación. La Sala considera que se dan los requisitos legales de la compensación, que según los artículos 1714 y 1715 del Código Civil son: 1. Que dos personas sean deudoras una de otra. 2. Que las deudas sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad. 2. Que ambas deudas sean líquidas. 3. Que ambas sean actualmente exigibles. (…)

En virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en el evento en el que al contratista le sea impuesta una condena, habrá lugar a que se descuente de dicha cifra, el monto de los valores que se encuentren a su favor o que estarán a su favor, y que a la fecha o a futuro, le adeude la gobernación al contratista. Así pues, que el valor a tener en cuenta como capital debía ser $80.239.093,87 que de forma indexada a la fecha del pago ascendía a $82.779.401,92 pesos, y no el valor de $298.140.323,49 como erradamente lo tomó la tesorería.

Sobre las obligaciones condicionales suspensivas, la doctrina ha indicado:

Del acaecimiento de la condición pende el nacimiento mismo de la obligación -y, por supuesto, del correlativo derecho de crédito-. Es la consecuencia directa y trascendente de la condición suspensiva, que permite afirmar que, en rigor, lo que hay en esa relación jurídica, hasta ese momento, es un germen, una expectativa de derecho -y de la correlativa obligación-.

Precisamente bajo esa nítida orientación es que, en palabras del artículo 1536 del Código Civil: **la condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho.** **Mientras esté pendiente la condición, no puede exigirse el cumplimiento de la obligación, tal como, por si fuera necesario hacerlo, señala el primer inciso del artículo 1542 del Código Civil.**

“**Siguiendo la secuencia trazada, si la condición se cumple, la obligación nace, pasa de germen de derecho a derecho completo, de expectativa de derecho a derecho consolidado. Y esa obligación que nace, por regla general, se hace de una vez exigible -ahora como si fuera pura y simple-, salvo que haya plazo suspensivo que difiera esa exigibilidad**”.

La Gobernación del Putumayo, en evidente contradicción con la Ordenanza No. 766 de mayo 20 de 2018, Estatuto de Rentas del Departamento del Putumayo, omitió dar aplicación al art. 578 de su propio estatuto, toda vez que la compensación de saldos debió aplicarse previo a la emisión de la orden de pago, en razón de la existencia de saldos a favor del contratista; saldo que claramente debió descontarse del rédito, puesto que, de lo contrario, el departamento incurriría en un enriquecimiento sin justa causa, ya que, en primer lugar, no procedió al cruce de cuentas bajo la figura de la compensación, y, en segundo lugar, ordenó el pago por débitos que se encuentran solventados por los saldos a favor del contratista; todo ello, en perjuicio del patrimonio de los ejecutados pese a que el Estatuto de Rentas del Departamento del Putumayo así lo ordena:

**ARTÍCULO 578. COMPENSACIÓN DE DEUDAS FISCALES.** Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán:

Imputarlos dentro de su liquidación privada del mismo impuesto, correspondiente al siguiente período gravable.

Solicitar su compensación con deudas por concepto de impuestos, retenciones, intereses y sanciones que figuren a su cargo.

La obligación carece de exigibilidad al estar sujeta a una condición suspensiva no cumplida. En consecuencia, el título ejecutivo presentado es inexigible en los términos actuales. Por tanto, procede la **excepción de falta de título ejecutivo** debido a que la obligación no es clara ni exigible hasta tanto se realice la compensación de saldos correspondiente.

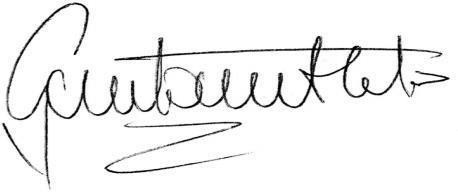
1. **PETICIONES**
2. Solicito la **INTERVENCIÓN** del **GOBERNADOR** para ejercer vigilancia administrativa como mecanismo de control sobre los procesos de cobro coactivo No. 2024-0007 y 2024-009, adelantado por la Gobernación del Putumayo contra la Compañía Mundial de Seguros S.A., el Consorcio Vías Terciarias, el señor Jesús Franco Yela Rodríguez, Construcciones y Obras de Ingeniería Alfa y Omega S.A.S., Construcciones y Obras de Ingeniería Fénix S.A.S., el señor Ariel Narváez Delgado, el señor Hernán Narváez Delgado, JMY Construcciones S.A.S., y SYS Petrol S.A.S. Esta solicitud se fundamenta en la eventual transgresión de derechos fundamentales y en la inobservancia de normas especiales de orden público que son de obligatorio cumplimiento y que, de manera arbitraria del poder coactivo, la Tesorería de la Gobernación del Putumayo ha decidido inobservar de manera inconsulta e infundada.
3. Que se adopten medidas **PREVENTIVAS Y URGENTES** dentro los procesos de cobro coactivo No. 2024-0007 y 2024-009, adelantado por la Tesorería de la Gobernación del Putumayo, con la finalidad de evitar la vulneración de los derechos fundamentales de mi representada y el consecuente perjuicio irremediable a su patrimonio, el cual no debe soportar.
4. **PRUEBAS Y ANEXOS**

Solicito se tengan en cuenta los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal que acredita el poder general
2. Resolución 021 de 2023
3. Resolución 022 de 2023
4. Resolución 038 de 2023
5. Resolución 051 de 2023
6. Traslado de la demanda
7. Acta de reparto
8. Auto avoca conocimiento
9. Resolución 189 de 2024
10. Mandamiento de pago – Resolución 059 de 2024
11. Excepciones frente al mandamiento de pago del proceso 2024-007
12. Liquidación de intereses corrientes y moratorios
13. Orden de pago por el siniestro de anticipo
14. Constancia bancaria del pago por el siniestro de anticipo
15. Caución para el proceso 2024-007
16. Oficio por el cual se acepta la caución
17. Oficio por el cual se acepta el levantamiento de los embargos dentro del 2024-007
18. Resolución No. 075 por la cual se resuelven excepciones
19. Recurso contra Resolución No. 075 de 2024
20. Orden de pago del siniestro de cumplimiento
21. Pago del siniestro de cumplimiento
22. Resolución 083 por la cual se libra mandamiento en el 2024-009
23. Excepciones frente al mandamiento de pago del proceso 2024-009
24. Caución en el proceso 2024-009
25. Solicitud de fijación de caución y liquidación
26. Oficio por el cual niega la caución.
27. **NOTIFICACIONES**

El suscrito recibe notificaciones en la dirección electrónica: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

Cordialmente,



# GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

1. *C.E., Secc. Tercera, Sent. 2000-01184, may. 29/2014. M.P. Conto Díaz del Castillo Stella* [↑](#footnote-ref-1)
2. *2 consejo de Estado Sala de lo contencioso Administrativo Sección Cuarta, C.P. Stella Jeanette Carvajal Basto, Radicación número: 25000-23-37-000-2014-01291-01(23288), Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)* [↑](#footnote-ref-2)
3. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta consejero Ponente: Milton Chaves García Bogotá D.C., quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación Número: 15001-23-33-000-2014-00538-01 (24765 [↑](#footnote-ref-3)